

timaba el recurso ordinario interpuesto contra la resolución de la Mutua-  
 lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 20 de enero  
 de 1995 sobre indemnización por lesiones permanentes no invalidantes.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente  
 pronunciamiento:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis-  
 trativo interpuesto por don Manuel Pachón Macías, contra las resoluciones  
 a que se hace referencia en el primer fundamento de esta sentencia, debe-  
 mos declarar y declaramos que los actos administrativos impugnados son  
 conformes a Derecho. No hacemos especial pronunciamiento en cuanto  
 al pago de las costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de con-  
 formidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2  
 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás  
 preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio-  
 so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín  
 Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-  
 pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 20 de marzo de 1998.—P. D. (Orden de 19 de noviembre de  
 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico,  
 Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General  
 de Funcionarios Civiles del Estado.

**8665** *ORDEN de 20 de marzo de 1998 por la que se dispone la  
 publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-  
 tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el  
 recurso contencioso-administrativo 3/1.570/1995, promovi-  
 do por don Francisco Javier Areso Barquin.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,  
 ha dictado sentencia, con fecha 23 de diciembre de 1997, en el recurso  
 contencioso-administrativo número 3/1.570/1995, en el que son partes,  
 de una, como demandante, don Francisco Javier Areso Barquin, y, de  
 otra, como demandada, la Administración General del Estado, represen-  
 tada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la resolución de la Inspección  
 General de Servicios de la Administración Pública de fecha 14 de julio  
 de 1995, sobre compatibilidad.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente  
 pronunciamiento:

«Fallamos:

Primero.—Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso  
 número 03-1570-1995, interpuesto por la representación de don Francisco  
 Javier Areso Barquin, contra las resoluciones del Ministerio para las Admi-  
 nistraciones Públicas descritas en el primer fundamento de derecho, que  
 se confirman por ajustarse al ordenamiento jurídico.

Segundo.—No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de con-  
 formidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2  
 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás  
 preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio-  
 so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín  
 Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-  
 pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 20 de marzo de 1998.—P. D. (Orden de 19 de noviembre de  
 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico,  
 Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.

**8666** *ORDEN de 20 de marzo de 1998 por la que se dispone la  
 publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-  
 tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el  
 recurso contencioso-administrativo 3/220/1995, promovido  
 por doña Carmen Martín Moya y otros.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional  
 ha dictado sentencia, con fecha 5 de diciembre de 1997, en el recurso  
 contencioso-administrativo número 3/220/1995, en el que son partes, de  
 una, como demandante, doña Carmen Martín Moya y otros, y, de otra,  
 como demandada, la Administración General del Estado, representada y  
 defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Departamento  
 de fecha 30 de enero de 1995, sobre integración en el Cuerpo General  
 Administrativo.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente  
 pronunciamiento:

«Fallamos:

Primero.—Estimar el presente recurso número 1072/1994, interpuesto  
 por el Letrado don José Carlos Carramolino Fitera en la representación  
 que ostenta, en lo que se refiere a las pretensiones ejercitadas por doña  
 Carmen Martín Moya, doña Beatriz Molero Llamusi, doña María Ros Jiménez  
 y doña María Dolores Martínez Pérez, declarando el derecho de las  
 mismas a la integración pretendida en el Cuerpo General Administrativo  
 desde la fecha en que se produjera vacante a partir de la fecha en que  
 cada una de ellas cumplía los requisitos de la integración, con abono de  
 las diferencias económicas correspondientes, anulándose en tal aspecto  
 la resolución impugnada.

Segundo.—Desestimar el recurso en cuanto a la recurrente doña María  
 Dolores López Jiménez, confirmando la resolución impugnada en lo que  
 a ella se refiere.

Tercero.—No hacer expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de con-  
 formidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2  
 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás  
 preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio-  
 so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín  
 Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-  
 pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 20 de marzo de 1998.—P. D. (Orden de 19 de noviembre de  
 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico,  
 Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.

**8667** *ORDEN de 20 de marzo de 1998 por la que se dispone la  
 publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-  
 tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el  
 recurso contencioso-administrativo 3/2.130/1995, promovi-  
 do por doña Ana Pérez Guerrero y otros.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,  
 ha dictado sentencia, con fecha 27 de enero de 1998, en el recurso con-  
 tencioso-administrativo número 3/2.130/1995, en el que son partes, de  
 una, como demandante, doña Ana Pérez Guerrero y otros, y, de otra, como  
 demandada la Administración General del Estado, representada y defen-  
 dida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la resolución del Departamento  
 de fecha 27 de septiembre de 1995, que declaró inadmisibles los recursos  
 ordinarios interpuestos contra la Resolución de la Secretaría de Estado  
 para la Administración Pública, de fecha 19 de junio de 1995, sobre Plan  
 de Empleo del Instituto Nacional de Empleo.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente  
 pronunciamiento:

«Fallamos:

Primero.—Que debemos desestimar y desestimamos el recurso número  
 2.130/95, interpuesto por doña Ana Pérez Guerrero, doña María del Rocío